

DEMOCRACIA CON RESULTADOS

DESARROLLO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO EN HONDURAS



Noviembre 2025

**UN PAÍS
DIVIDIDO
EN REALIDADES**

Mientras algunos territorios reciben inversión y atención pública, otros sobreviven con servicios deteriorados y economías frágiles. Esta desigualdad profundiza la sensación de abandono y limita la confianza en la democracia.

© FOSDEH

Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras

Col. Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino, Casa 1011, Tegucigalpa, Honduras.

Tel/Fax: (504) 2239-3404 | (504) 2239-2110

Correo electrónico: contacto@fosdeh.net

Sitio web oficial: www.fosdeh.hn Facebook- Instagram: @fosdeh - Twitter: @fosdeh -

YouTube: Fosdeh

Coordinación General

Mauricio Díaz Burdett

Autores

Emma Velásquez.

Dina Bonilla

Evin Pagoaga.

Fernando Hernández

Isma Mariely Romero

Helen Yisel Turcios Padilla

Guillermy Dariela Crescencio

Paula Karina Müller Gómez

Jeydi Yajaira Trochez Euceda

Guillermy Dariela Crescencio

José Félix Cobán Franco

Suna Emilia Chávez Wood

Darwin Pineda Pereira

Christian Jair Mejia Suazo.

Claudia Fortin

Imer Maldonado

Diagramación

Joel Aleman





Contexto

Honduras enfrenta una crisis multidimensional donde las desigualdades sociales, la fragilidad institucional, la exclusión territorial y la desconfianza ciudadana se sostienen mutuamente y erosionan la legitimidad democrática. Esta situación se expresa tanto en la vida cotidiana de las comunidades como en la arquitectura institucional del país. En el sur, la población afirma que cuando el agua se seca, también se seca la esperanza; en la Mosquitia, la juventud repite que no quiere caridad, sino oportunidad. En los territorios rurales la ciudadanía siente que la corrupción no solo roba dinero, sino también futuro y confianza. Estas percepciones coinciden con diagnósticos técnicos que revelan un modelo de desarrollo desigual, sistemas de salud y educación debilitados, violencia persistente, desigualdades de género y ausencia estatal en vastas regiones.

El fortalecimiento democrático en Honduras requiere un enfoque integral de desarrollo social que articule participación, transparencia, cohesión territorial y servicios públicos de calidad. La reconstrucción de la democracia debe comenzar desde lo local, donde las decisiones públicas impactan directamente la vida cotidiana. No se trata únicamente de reformar la gestión electoral o mejorar instituciones centrales, sino de transformar las condiciones sociales que hacen posible una ciudadanía activa, crítica y comprometida. Es un enfoque que concibe la democracia no solo como sistema electoral, sino como un modelo que produce mejoras concretas en la vida cotidiana: servicios públicos dignos, oportunidades económicas, protección de derechos y un Estado que escucha y responde. Una democracia con resultados fortalece la confianza en las instituciones y reduce la distancia entre ciudadanía y política.

Este análisis basado en evidencia territorial y testimonios ciudadanos, propone medidas concretas y ha sido elaborado por el Movimiento Ambientalista Social de Sur por la Vida (MASSVida), Asociación Árbol de la Misericordia, Asociación de jóvenes misquitos Asla Pawuaia, Alianza por la Paz y la Justicia, y académicas como los miembros de la Asociación de Estudiantes de Sociología; radios comunitarias La Cholula Triunfeña, Radio Savia, Stereo Namasigue y el Foro Social de la Deuda y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Con este esfuerzo conjunto, se presenta la demanda de avanzar hacia un modelo de democracia que cuida, escucha y responde.

La ciudadanía demanda que los candidato incorporen en sus planes de gobierno estrategias e inversiones orientadas a mejorar los servicios básicos con enfoque territorial; fortalecer las capacidades de gobiernos locales; promover empleo digno para jóvenes; consolidar un sistema de transparencia accesible; garantizar justicia ambiental y gestión sostenible del agua; impulsar la participación de mujeres y juventudes; y garantizar condiciones de seguridad ciudadana y política que permitan ejercer plenamente los derechos civiles.

El problema central reside en que Honduras transita por un ciclo recurrente de inestabilidad donde la política y la vida social se han distanciado. La ciudadanía percibe en la clase política una narrativa que promete escuchar, pero que en la práctica no logra convertir ese compromiso en acciones concretas que respondan a las necesidades locales. Esta brecha entre expectativas y resultados profundiza la crisis de representación en el actual proceso electoral y mantiene el hecho de que más del 70% de la población exprese insatisfacción con el funcionamiento de la democracia (Latinobarómetro, 2023). La desconexión entre agenda nacional y prioridades locales produce desconfianza, desinformación y polarización, lo cual agrava la gobernabilidad democrática.

Las desigualdades sociales son una de las principales raíces de esta crisis. La falta de oportunidades educativas y laborales limita la movilidad social y esta empujando a miles de jóvenes hacia la migración, la informalidad o dinámicas de riesgo. Entre jóvenes de 12 a 30 años, una tercera parte no estudia ni trabaja, mientras que la informalidad laboral supera el 70% (INE, 2024). Esta precariedad no solo compromete el crecimiento económico, sino que debilita la cohesión comunitaria.

Las mujeres enfrentan obstáculos aún más profundos. La violencia de género ha provocado más de un centenar de muertes violentas solo en los primeros nueve meses del año, reflejando la normalización de la violencia en todos los entornos. Las brechas de acceso a justicia, empleo, seguridad y liderazgo generan un déficit democrático que compromete la participación plena de más de la mitad de la población.

Los territorios más alejados del poder político enfrentan un abandono histórico reflejado en servicios públicos insuficientes, oportunidades económicas limitadas y una débil presencia institucional. La combinación de deterioro ambiental, escasez de recursos esenciales, baja inversión pública y expansión de actividades informales o ilícitas incrementa la vulnerabilidad social y empuja a muchas familias a migrar ante la falta de alternativas. Este patrón no es circunstancial: evidencia brechas estructurales que profundizan la desigualdad y debilitan la confianza en las elecciones y participación política.

En este contexto, las voces comunitarias claman un punto en común: la democracia empieza cuando alguien escucha lo que no quiere oír. Escuchar esas voces, comprenderlas y traducirlas en política pública es una condición para restablecer la confianza pública y reconstruir el contrato social en Honduras.

■ Contexto y Antecedentes

La gobernanza hondureña opera en un modelo que reproduce desigualdad económica, social y territorial, donde la concentración del poder, la debilidad institucional y la exclusión política perpetúan brechas estructurales.

En salud persiste un déficit que limita la atención oportuna, mientras en educación más de un millón de estudiantes están fuera del sistema y la escolaridad promedio apenas supera los siete años. Al mismo tiempo, un modelo económico basado en privilegios fiscales ha debilitado la base tributaria, frenando el desarrollo productivo territorial y consolidando una informalidad que restringe derechos laborales, seguridad social y la capacidad estatal para impulsar crecimiento sostenible y cohesión social.

La violencia criminal, política y de género continúa afectando el ejercicio democrático; pese a la leve mejora registrada, el país sigue entre los más violentos de la región, con 25.3 homicidios por cada 100,000 habitantes (OACNUDH, 2025), afectando especialmente a jóvenes de 15 a 34 años. A ello se suman conflictos socioambientales derivados de monocultivos, minería e hidroeléctricas sin consulta previa, que provocan desplazamientos y criminalización de defensores ambientales. En el ámbito electoral, la desigualdad en formación cívica y el temor a la violencia deterioran la confianza ciudadana.

Frente a estas tensiones, mujeres, jóvenes y organizaciones comunitarias sostienen redes locales que suplen vacíos estatales, fortalecen la cohesión social y constituyen una base para reconstruir la legitimidad democrática desde los territorios.



El Problema

El fortalecimiento democrático en Honduras requiere comprender las interacciones entre pobreza, exclusión, violencia, corrupción y abandono territorial. La democracia no puede sostenerse sobre servicios deteriorados, economías débiles ni instituciones sin legitimidad. La ausencia estatal deja espacio a economías ilícitas y prácticas clientelares que refuerzan la impunidad y la desconfianza ciudadana. El problema democrático no es solo institucional; es estructural.

Los territorios muestran la profundidad del desafío. En Choluteca y Valle, la falta de agua y el deterioro ambiental debilitan la gobernanza y la salud comunitaria. En Intibucá y Lejamaní, la ciudadanía pide “seguridad construida desde la justicia, la educación y las oportunidades”, rechazando respuestas militarizadas. En la Mosquitia, la distancia entre instituciones y necesidades locales se traduce en abandono y desigualdad; la frase “el desarrollo no puede seguir llegando en avión” ilustra la urgencia de políticas con presencia real y sostenida.

La juventud representa un actor estratégico, pero el país vive una crisis de oportunidades. El desempleo, la baja calidad educativa y la desconexión institucional generan una brecha generacional que amenaza el futuro democrático. Las mujeres, por su parte, enfrentan la triple carga de violencia, desigualdad económica y exclusión política. Sin ellas, no existe base social para una democracia sostenible.

La democracia hondureña opera bajo tensiones constantes que podrían resumirse como un círculo vicioso: desigualdad social y territorial, debilidad institucional, violencia criminal, social y de género, migración y economías ilícitas y desconfianza y desencanto político. Este círculo limita la capacidad estatal para garantizar bienestar social y refuerza la percepción de abandono. Romper este círculo requiere políticas públicas centradas en las personas y los territorios, articulando participación ciudadana, transparencia, justicia ambiental y servicios públicos de calidad.

Opciones de Políticas Sociales

Existen distintos caminos para abordar la crisis, todos ellos vinculados al desarrollo social y a la reconstrucción del vínculo entre ciudadanía e instituciones. Una opción es fortalecer los servicios públicos desde una lógica de equidad territorial. Esto implica re dirección de recursos, fortalecimiento de capacidades municipales y mecanismos de seguimiento ciudadano que garanticen calidad y transparencia.

Otra opción es promover un pacto social para la juventud que integre empleos dignos, educación técnica, participación política y programas de prevención de violencia. Esto rompería el ciclo que empuja a miles de jóvenes hacia la migración o la informalidad, ampliando la base social del desarrollo democrático.

Un tercer camino es profundizar la transparencia y la auditoría social como bases de legitimidad. La ciudadanía exige que “cada lempira sea visible”, y reclama participación en la asignación de recursos, seguimiento de la infraestructura pública y fiscalización de decisiones públicas. Transparencia no puede ser una promesa, sino una práctica cotidiana.

Una cuarta opción consiste en impulsar justicia ambiental y gestión integral del agua, reconociendo que la gobernanza de los recursos naturales es también gobernanza democrática. Territorios del país demandan políticas basadas en evidencia y participación que frenen la degradación ambiental y protejan el bienestar comunitario.

Finalmente, es indispensable fortalecer el liderazgo de mujeres y jóvenes, promoviendo participación en gobiernos locales, juntas de agua, patronatos y espacios de planificación territorial. Esto ampliaría la pluralidad democrática y permitiría que agendas relegadas transformen las prioridades públicas.

Recomendaciones

Para avanzar hacia una democracia que cuida y reconoce las voces de los territorios, se proponen las siguientes recomendaciones:

Primero, impulsar un programa nacional de servicios básicos con enfoque territorial que garantice salud y educación de calidad, con recursos suficientes, planificación participativa y mecanismos de verificación comunitaria. Esto permitirá reducir las brechas entre áreas urbanas y rurales y fortalecer la cohesión social.

Segundo, diseñar e implementar una estrategia integral de empleo juvenil que combine formación técnica, incentivos a empresas locales, becas municipales, emprendimiento comunitario y espacios de diálogo entre jóvenes y gobiernos locales. Esta estrategia debe reconocer que la juventud no busca caridad, sino oportunidad.

Tercero, promover un sistema nacional de transparencia accesible que permita conocer en tiempo real el uso de los recursos públicos. Debe incluir datos abiertos, portales simplificados para ciudadanía y auditoría social con apoyo técnico y normas estrictas de integridad pública.

Cuarto, fortalecer la gobernanza ambiental mediante la gestión integral del agua, la restauración de bosques y la aplicación efectiva de la normativa ambiental. Esto incluye proteger a defensores ambientales, esclarecer conflictos territoriales, garantizar consulta previa e implementar planes de adaptación climática desde las comunidades.

Quinto, garantizar la participación de mujeres y jóvenes en espacios de decisión mediante liderazgo comunitario, incentivos para la representación paritaria en gobiernos locales, fortalecimiento de redes de apoyo y programas de prevención de violencia.

Sexto, invertir en seguridad humana con enfoque social mediante prevención comunitaria, salud mental, convivencia escolar y programas de reinserción socioeconómica para jóvenes y retornados. La seguridad debe construirse con oportunidades, no solo con control.

Séptimo, reforzar las capacidades municipales mediante asistencia técnica, planificación de largo plazo, sistemas de rendición de cuentas y participación ciudadana vinculante en presupuestos y obras públicas. Los gobiernos locales son el primer nivel de la democracia.

Octavo, promover un nuevo pacto fiscal progresivo que priorice la inversión social y reduzca privilegios que limitan la base tributaria. Los recursos deben orientarse a territorios históricamente excluidos y a servicios esenciales con alto impacto en cohesión social.

Noveno, en el actual contexto electoral, se recomienda que los candidatos y candidatas incorporen compromisos claros y verificables que incluyan metas medibles en servicios básicos, un enfoque territorial que priorice la inversión en zonas históricamente excluidas, y mecanismos de transparencia desde la campaña, como la publicación del financiamiento y la adopción de normas de integridad pública. Asimismo, deben garantizar la participación efectiva de mujeres y jóvenes en equipos técnicos y espacios de decisión, evitar promesas asistencialistas sin sostenibilidad fiscal e impulsar propuestas centradas en oportunidades, educación técnica y empleo digno, especialmente para juventudes. Finalmente, es fundamental que los aspirantes a cargos públicos se comprometan con mecanismos de seguimiento postelectoral: informes de avance, auditoría social y participación ciudadana, para asegurar la implementación real de sus planes de gobierno y fortalecer la confianza pública en el proceso democrático.

En Resumen...

El fortalecimiento democrático desde el desarrollo social no es un ejercicio técnico aislado; sino un proceso político y comunitario que requiere escuchar, reconocer y responder. Las voces de los territorios, junto con la evidencia institucional, coinciden en que la democracia hondureña debe reconstruirse desde la vida cotidiana de las comunidades, garantizando derechos, servicios y oportunidades. La frase “transformar un modelo históricamente concentrado en uno basado en la inclusión y la corresponsabilidad constituye el desafío central” encapsula con precisión este propósito.

Una democracia que cuida es aquella que llega a todos los territorios, ofrece servicios dignos, respeta derechos, escucha voces diversas y garantiza justicia. Avanzar en este sentido permitirá reconstruir la confianza pública, fortalecer la legitimidad institucional y abrir la posibilidad de un país más equitativo, sostenible y democrático.

Este momento electoral y el inicio de un nuevo gobierno ofrece la posibilidad de redefinir el rumbo del país: avanzar hacia una democracia que produce resultados visibles para la gente y reconstruye la confianza desde los territorios.

